

DERECHOS PERSONALISIMOS. Derecho a la salud. Derecho a la vida. Derecho constitucional. Tratados internacionales.

Mosqueda, Sergio c. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

Corte Suprema de Justicia de la Nación (07/11/2006)

Publicado en: LA LEY 18/12/2006, 7 - DJ 27/12/2006, 1239

HECHOS:

Una persona discapacitada dedujo acción de amparo contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (PAMI), reclamando diversas prácticas kinesiológicas, necesarias para tratar la discapacidad que padece a raíz de una hemiplejía derecha que le impide la libre deambulaci3n. La C3mara confirm3 la resoluci3n del juez de grado que hab3a rechazado la acci3n interpuesta, considerando que hab3a sido iniciada en forma extempor3nea. Contra este pronunciamiento, se interpuso recurso extraordinario, cuya denegatoria motiv3 la queja. La Corte Suprema de Justicia de la Naci3n hizo lugar al recurso y dej3 sin efecto la sentencia apelada

SUMARIOS:

- **A partir de la reforma constitucional de 1994, el derecho a la vida se encuentra expl3citamente garantizado en la Constituci3n Nacional, a trav3s de su reconocimiento y protecci3n en tratados de derechos humanos que gozan de jerarqu3a constitucional. (Del voto de los doctores Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni)**

- **El derecho a la vida, m3s que un derecho no enumerado en los t3rminos del art3culo 33 de la Ley Fundamental, es una prerrogativa impl3cita, ya que el ejercicio de los derechos reconocidos expresamente requiere necesariamente de 3l y, a su vez, el derecho a la salud est3 3ntimamente relacionado con el primero y con el principio de autonom3a personal, desde que un individuo gravemente enfermo no est3 en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida (Del dictamen de la Procurador Fiscal subrogante que la Corte hace suyo).**

- **Trat3ndose de la cobertura integral de las prestaciones b3sicas por discapacidad, at3e a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conlleva este tipo de pretensiones, para lo cual deben encauzar los tr3mites por v3as expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustraci3n de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional, lo cual se producir3 --en el caso-- si el reclamo del actor tuviese que aguardar al inicio de un nuevo proceso (Del dictamen de la Procurador Fiscal subrogante que la Corte hace suyo).**

TEXTO COMPLETO:

Dictamen del Procurador General Subrogante de la Naci3n:

Suprema Corte:

I. La Sala "2", de la C3mara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, confirm3 la resoluci3n del juez de grado que hab3a rechazado la acci3n de amparo interpuesta por el actor contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (PAMI), con el objeto de que se ordenara brindar la inmediata cobertura m3dica del 100% a favor del amparista y cumplir con la resoluci3n 134/04 de la Superintendencia de Servicios de Salud (v. fs. 25 y vta).

El actor reclama diversas pr3cticas kinesiol3gicas, necesarias para tratar la discapacidad que padece a raz3 de una hemiplej3a derecha con secuela de A.C.V. que le impide la libre deambulaci3n debiendo movilizarse en silla de ruedas.

Para decidir como lo hizo, la Sala consider3 que la presente acci3n de amparo fue iniciada en forma extempor3nea.

Dijo que el plazo de quince d3as h3biles que establece el art3culo 2º, inciso "e", de la ley 16.986, "se computar3 a partir de la fecha en que el afectado tom3 conocimiento cierto del hecho, acto u omisi3n que repute violatorio de sus derechos", conforme lo estableci3 el plenario de esa C3mara, en la causa "Capizzano de Galdi, Concepci3n c/ IOS s/amparo".

Sobre esa base, ponder3 que el propio accionante manifest3 que el INSSJP respondi3 "sin dar cumplimiento efectivo a la intimaci3n cursada" por la Superintendencia de Servicios de Salud, con fecha 11 de marzo de 2004, y que

la demanda de autos fue presentada recién el 31 de agosto de ese año.

II. Contra este pronunciamiento, el actor interpuso el recurso extraordinario de fs. 28/31 vta., cuya denegatoria de fs. 43 y vta., motiva la presente queja.

Relata que en el año 1999 comenzó el tratamiento de rehabilitación ambulatoria en la Unidad de Gestión San Martín del PAMI, y que desde hace dos años se ha interrumpido la prestación por parte de la obra social con fundamento en la gran cantidad de pacientes en la misma condición. Por tales motivos -prosigue- inició un expediente administrativo ante la Superintendencia de Servicios de Salud y, a raíz de que la obra social no remitió los informes solicitados por este organismo, ni se presentó a formular descargo alguno, la Gerencia de Asuntos Jurídicos, por resolución 134/04, estimó que la obra social debía brindar la cobertura integral de las prestaciones que se relacionan directamente con la discapacidad, con fundamento en la ley 24.091, e intimó al INSSJP a prestar la cobertura del 100% en rehabilitación kinesiológica necesaria para el tratamiento de la discapacidad que padece.

Alega que se valora erróneamente la fecha en que la omisión que se ataca debió producirse, ya que si bien el 11 de marzo de 2004 la demandada contestó la intimación antes referida, no dio cumplimiento a la pretensión solicitada, motivo por el cual continuó reclamando por la vía administrativa. Sostiene, invocando jurisprudencia del Tribunal, que el artículo 2º inciso "e" de la Ley de Amparo no es un escollo insalvable cuando con la acción incoada se enjuicia una ilegalidad continuada originada tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida en el tiempo de accionar y también en el tiempo siguiente.

Aduce que no se ha valorado correctamente la diligencia con la que obró el actor, ya que el expediente administrativo sigue su curso habiendo efectuado diversos reclamos que motivaron que la Superintendencia realizara nuevas intimaciones a la demandada bajo apercibimiento de sustanciar el procedimiento sancionatorio previsto por la ley 23.661, todo lo cual surgiría del expediente administrativo ofrecido en su oportunidad como prueba informativa.

Conforme a ello, considera que se han cumplido los requisitos exigidos para la procedencia del amparo, esto es, la sumaria acreditación de la inexistencia de una vía judicial más idónea; la existencia de actos u omisiones de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesionen, restrinjan, alteren o amenacen derechos o garantías reconocidos por la constitución; y arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el acto u omisión.

III Corresponde recordar en primer término, que V.E. tiene dicho que el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo éste el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. El hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo —más allá de su naturaleza trascendente— su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (v. doctrina de Fallos: 323:3229).

A partir de esta premisa, es inevitable tener en cuenta que el actor -según constancias de autos-es un anciano que hoy tiene 74 años (v. fs. 1), con discapacidad motora como consecuencia de un accidente cerebro vascular (A.C.V.) de nueve años de evolución, que lo obliga a desplazarse en silla de ruedas, y que, según sus manifestaciones, a la fecha de interposición del amparo, ya hacía dos años que se había interrumpido la rehabilitación brindada a su persona por la demandada. Con tal motivo, inició ante la Superintendencia de Servicios de Salud el reclamo administrativo pertinente, organismo que habría dictado la resolución 134/04 (v. fs. 13) disponiendo la cobertura total de la rehabilitación solicitada, decisión que no habría sido cumplida por el INSSJP, ante lo cual —según afirma el actor— continuó efectuando requerimientos administrativos.

En tales condiciones, estimo ajustado al caso de autos lo que el Procurador General Subrogante, si bien en el contexto de otros supuestos fácticos, expusiera en su dictamen de Fallos: 307:2174, en orden a que "el escollo que se deduce de la prescripción del artículo 2º, inciso "e", de la ley 16.986, no es insalvable en la medida en que con la acción incoada se enjuicia una arbitrariedad o ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada, es verdad, tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo siguiente. No es un hecho único, ya pasado -prosiguió-, ni un hecho consentido tácitamente, ni de aquellos que en virtud de su índole deben plantearse en acciones ordinarias (...). Pensamos que en la especie la lesión es a la vez, inescindiblemente, actual y pasada" (el subrayado me pertenece).

La solución que propicio encuentra justificación en precedentes del Tribunal, que ha establecido que el derecho a la vida, más que un derecho no enumerado en los términos del artículo 33 de la Ley Fundamental, es una prerrogativa implícita, ya que el ejercicio de los derechos reconocidos expresamente requiere necesariamente de él y, a su vez, el derecho a la salud está íntimamente relacionado con el primero y con el principio de autonomía personal, desde que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida (v. doctrina de Fallos: 323:1339).

Más en conexión con el reclamo planteado en el sub lite y el rechazo de la vía del amparo, procede recordar que en el precedente de Fallos 327:2127, esta Procuración señaló —también en el marco supuestos fácticos diferentes, pero vinculados con la cobertura integral de las prestaciones básicas por discapacidad— que el Tribunal ha interpretado

que atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conlleva este tipo de pretensiones, para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional, lo cual se produciría si el reclamo del actor tuviese que aguardar al inicio de un nuevo proceso (v. doctrina de Fallos: 324:122).

IV En virtud de todo lo expuesto, y dado que la solución del caso, atento a las condiciones precedentemente referidas, no admite mayores dilaciones, opino que se debe declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada. — Febrero 13 de 2006. — Marta A. Beiró de Gonçalves.

Buenos Aires, noviembre 7 de 2006.

Considerando: Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante al que remite en razón de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario deducido y se deja sin efecto la sentencia. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Acumúlese la queja al principal. — Enrique S. Petracchi. — Elena I. Highton de Nolasco (según su voto). — Carlos S. Fayt. — Juan C. Maqueda (según su voto). — E. Raúl Zaffaroni (según su voto). — Ricardo L. Lorenzetti.

Voto de los doctores Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni:

Considerando: Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante al que remite en razón de brevedad.

Que en cuanto al derecho a la vida, cabe agregar que después de la reforma constitucional de 1994 este derecho se encuentra explícitamente garantizado en nuestra Constitución Nacional, a través de su reconocimiento y protección en tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. I; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 4.1; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 3°; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 6°; Convención sobre los Derechos del Niño, art. 6°).

Por ello, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario deducido y se deja sin efecto la sentencia. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Acumúlese la queja al principal. — Elena I. Highton de Nolasco. — Juan C. Maqueda. — E. Raúl Zaffaroni.